

Martínez Valle, Luciano. **Las organizaciones de segundo grado como nuevas formas de organización de la población rural..** *En publicación: La construcción de la democracia en el campo latinoamericano.* de Grammont, Hubert C.. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Marzo 2006. ISBN: 987-1183-38-0

Disponible en la World Wide Web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/gram/C04MValle.pdf>

www.clacso.org

RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO

<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

biblioteca@clacso.edu.ar

LUCIANO MARTÍNEZ VALLE*

LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO GRADO COMO NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL

INTRODUCCIÓN

Durante la década del ochenta se habló mucho en Ecuador de que, al contrario de lo que había sucedido en la economía de la región, se trataba de una *década ganada* en el aspecto organizacional (Bebbington et al., 1992). En efecto, las organizaciones habían crecido como campeones, lo que hacía suponer un poco mecánicamente el fortalecimiento de la sociedad civil rural. No hay que olvidar que justamente en esa década comienza todo un proceso de efervescencia en torno a las demandas étnicas en América Latina, que al inicio del ajuste económico (al menos en el caso de Ecuador) se consolidarían en una política de contrabalance frente a los impactos negativos del neoliberalismo que amenazaban a la sociedad rural. Para los años noventa, la protesta indígena se plasmó en dos levantamientos importantes: el primero en 1990 y el segundo en 1994. Entre el primero y el segundo hay, no obstante, un cambio central en los planteamientos de los indí-

* Sociólogo, Profesor-Investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Ecuador.

genas: la bandera de la lucha por la tierra enarbolada con fuerza en el primero pasa a segundo plano en el segundo, mientras cobran fuerza las reivindicaciones étnicas de todo cuño. Este cambio no es pasajero y muestra un corte histórico importante en la orientación de la lucha indígena, en sus demandas centrales y en las respuestas por parte del Estado y los organismos financieros internacionales.

En 1994, y bajo la presión de las Cámaras de Agricultura apoyadas por estudios de economistas americanos¹, finalmente se logró la expedición de la Ley de Desarrollo Agropecuario (LDA), que significó la eliminación de la Reforma Agraria. En adelante, será el mercado el único referente para acceder a la tierra, incluso en las mismas comunidades. Tal parece que al cerrarse la puerta legal para acceder a la tierra se hubiera también bajado el telón de la lucha por la tierra que había caracterizado a cuarenta años de movilización campesina². Así, en el discurso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y del resto de organizaciones indígenas, desaparecen poco a poco las referencias a la lucha por la tierra, mientras surgen nuevas demandas vinculadas con la etnicidad: plurinacionalidad, territorio, legalidad étnica, pluriculturalidad, etc. Lo sorprendente de todo esto es que, como lo muestran las cifras del mismo Censo Agropecuario de 2001, la distribución de la tierra no se había modificado desde 1974 y continuaba con un patrón concentrador (Índice de Gini de 0,80), que mostraba el fracaso del funcionamiento del mercado de tierras. Los mismos indígenas se encontraban atrapados en una situación de minifundismo exacerbado, con pocas opciones para continuar siendo productores agrarios. Entonces, ¿por qué las organizaciones indígenas habían silenciado su voz respecto a este tema que, en cambio, movilizaba a los campesinos en la década del setenta? ¿Es que ya no existía el problema agrario en el país?

1 El informe Whitaker sirvió de base para la elaboración de la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994.

2 Cuando en julio de 2003 recibí la visita de una estudiante chilena que hacía su doctorado en la Universidad de Notre Dame (EE.UU.) y que quería comparar los procesos organizativos y la lucha por la tierra en Brasil y Ecuador, me pareció que era necesaria una aclaración. La consolidación del nivel organizativo del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil no tenía nada que ver con la consolidación de la CONAIE y otros movimientos indígenas en Ecuador; faltaba el denominador común (la lucha por la tierra), al menos en el caso ecuatoriano. La mencionada estudiante no salía de su sorpresa, porque esa era la visión que se manejaba fuera del país y, por lo mismo, era poco menos que inconcebible que, dado el enorme avance, en la organización indígena no se privilegiara la lucha por la tierra.

Para sorpresa de muchos, este viraje se daba incluso en un entorno en el que se planteaba que los indígenas eran el sector más organizado del país. Tal parece que la organización indígena hubiera tomado otro atajo, desvinculándose de este problema central y respondiendo a otra dinámica externa más vinculada a lo que se conoce como el *post Consenso de Washington*, que busca, entre otros aspectos, vincular el *respaldo social* para corregir las imperfecciones del mercado y dar un rostro humano a las políticas de ajuste (Fine, 2003). Es en este contexto que hay que analizar el *boom organizacional* que experimenta el sector rural ecuatoriano en las últimas dos décadas. Un crecimiento que está muy vinculado al proyectismo, al desarrollismo y al etnicismo. Tres *ismos* que marcan una nueva concepción de lo que sucede actualmente en el medio rural ecuatoriano.

En este trabajo abordaré, en primer lugar, lo que se entiende por organizaciones de segundo grado (OSG) y el peso que tiene esta forma de organización en el medio rural; seguidamente, plantearé las explicaciones del crecimiento en la última década, para luego abrir una discusión sobre el tema del capital social; y finalmente, exponer algunas tendencias o perspectivas de este tipo de organizaciones y su rol en el desarrollo rural.

¿CÓMO CARACTERIZAR A LAS OSG?

En principio, una OSG es una agrupación de organizaciones de base (homogénea u heterogénea) que adquiere un estatuto de representatividad local y/o regional en la medida en que busca concretar las demandas provenientes de sus bases. En el caso ecuatoriano existen OSG que han surgido vinculadas a la lucha por la tierra y a reivindicaciones políticas en los años setenta, y OSGs más modernas que han proliferado en los años ochenta y noventa como respuesta a la oferta de proyectos por parte del Estado, ONG y, más recientemente, por parte de instituciones como el BM, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el BID.

Las organizaciones de segundo grado en Ecuador tienen características que rebasan las clásicas tipologías de organizaciones del medio rural. Según Moyano, por ejemplo, existirían tres tipos de organizaciones rurales: las reivindicativas, las de carácter económico, y las profesionales. Las primeras son consideradas gremiales y buscarían “la defensa integral de los intereses del colectivo social que dicen representar”; las segundas, “generalmente se encuentran vincu-

ladas a la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios”; y las terceras buscan más bien el “desarrollo de sus afiliados” (citado por Gómez, 2000: 45-46). Es claro que las OSG no calzan dentro de esta tipología en la medida en que son al mismo tiempo reivindicativas y tienen rasgos de las de tipo económico, aunque evidentemente no tengan nada que ver con la dimensión profesional. Las OSG incluyen en sus bases un sinnúmero de tipos de organización, desde aquellas de corte ancestral como las comunas, o de tipo productivo como las cooperativas, hasta organizaciones de tipo social y cultural. Aquellas OSG que sólo incluyen comunidades tienen, evidentemente, una mayor homogeneidad en sus bases y constituyen estructuras institucionales de mucho peso en el medio rural, pero no es la regla general. Esta heterogeneidad en las bases puede ser un factor que se refleje también en las reivindicaciones levantadas por la OSG que no siempre responden al *interés general* o a las prioridades del desarrollo local³.

Un intento de tipologización de OSG para el caso ecuatoriano lo realiza también Thomas Carroll (2003), quien las clasifica en cuatro tipos: reivindicativo/político/cabildeo, empresa social, multifuncionales y manejo de recursos naturales. La mayoría de las OSG censadas en 2002 corresponderían al tipo *multifuncionales*, en la medida en que además de los pequeños proyectos que impulsan, todavía conservan en sus estatutos ciertas reivindicaciones políticas que pueden reactivarse en coyunturas específicas. No existen prácticamente organizaciones empresariales y de manejo exclusivo de recursos naturales.

Al presente no disponemos de datos para clasificar a las OSG según esta tipología, pero un acercamiento a algunos recientes estudios de caso puede servir para ilustrar el carácter de estas organiza-

3 Existen otros problemas inherentes a las OSG que sobrepasan el alcance de este trabajo, como la presencia del caudillismo y caciquismo en la dirigencia de estas organizaciones. Este problema ha sido analizado extensamente por Bahamondes Parrao para el caso chileno, como un obstáculo para la concreción de capital social en la medida que en la sociedad rural existen clientelismos o semiclientelismos que reemplazan frecuentemente las relaciones de cooperación en una comunidad (2001: 16). La presencia de dirigentes por más de diez años y la concentración familiar de dirigentes son muy frecuentes en organizaciones débiles y nada democráticas, y no ayudan a la construcción del capital social. Igualmente, una de las debilidades halladas en las organizaciones estudiadas dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER) era justamente “el manejo paternalista de recursos y decisiones y clientelismo arraigado; abuso de poder de representantes campesinos en las distintas instancias de decisión” (Arrobo y Prieto, 1995: 131).

ciones. Así, por ejemplo, el estudio realizado en 2000 sobre cuatro OSG importantes de la sierra muestra las siguientes características: la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC) en la provincia de Imbabura, surgida en un contexto de reivindicaciones políticas, depende ahora para su sobrevivencia del financiamiento de pequeños proyectos; la Unión de Organizaciones Populares de Ayora, Cayambe (UNOPAC), en la provincia de Pichincha, es de hecho una ONG campesina que administra varios proyectos para pequeños productores⁴; la Organización Jatun Ayllu Cabildo de Guamote (OJAG) en la provincia de Chimborazo, surgida al calor de la lucha por la tierra, sufre de un proceso de reflujo organizativo al no ubicarse dentro del nuevo contexto del desarrollo local; y finalmente, la Tucuy Cañar Aillucunapac Tatanacuy (TUCAYTA) en la provincia de Cañar, que se consolidó en torno al manejo del riego, ha sido golpeada recientemente por la migración internacional y la dolarización. Si bien estas cuatro OSG pueden haber logrado una *buena capacidad organizativa*, varios problemas (internos y externos) amenazan su sustentabilidad⁵. En todos los casos estudiados se evidencia una pérdida del horizonte político-reivindicativo, pero también una consolidación en el perfil de manejo de proyectos, a excepción del caso de Guamote que incluso ha perdido peso en este ámbito al surgir el Municipio como el nuevo actor protagónico. Pero existen sobre todo elementos que provienen del entorno macroeconómico y que afectan el funcionamiento de las OSG, sobre todo en la dimensión empresarial: el proceso de dolarización de la economía y la progresi-

4 Según Chiriboga (1996: 381), en los años noventa la diferenciación entre ONG y OSG se había tornado menos clara, en el sentido de que ambas se dedicaban a “promover el desarrollo local por medio de organizaciones sociales y sus beneficiarios”.

5 De hecho, existen otros elementos importantes que podrían servir de base para realizar tipologías de OSG. Así, un estudio anterior realizado por Víctor Bretón (2001) sobre tres OSG de la sierra (Corporación de Organizaciones Campesinas de Licto, Unión de Cabildos de San Juan en la provincia de Chimborazo y Unión de Indígenas Salasacas en la provincia de Tungurahua) señala seis tendencias importantes: se han formado por el impulso externo en el que participan varios actores (iglesias, ONG, Estado); existe una relación entre presencia de organizaciones de desarrollo y densidad organizativa; las bases son una clientela por la cual compiten las OSG; predominio de una dirigencia de corte tecnocrático; predominio de redes clientelares y consolidación de cacicazgos de “nuevo cuño”; y presencia de conflictos internos (dirigentes-bases, nuevos dirigentes-viejos dirigentes, etc.). Elementos todos que muestran una dimensión más real de la forma en que han surgido las OSG, las dificultades que tienen en ser “representativas” del mundo indígena y la forma nada democrática en la que actúan.

va entrada de productos agrícolas de países vecinos. Los pequeños proyectos centrados en actividades agropecuarias e incluso agroindustriales no tienen viabilidad en un contexto competitivo basado en más altos niveles de productividad. El progresivo retiro del Estado de la escena rural no ha sido acompañado de políticas de apoyo para pequeños productores, quienes se encuentran sometidos a la dura lógica del mercado y, por lo mismo, con reducidas posibilidades de mantenerse como tales⁶.

LAS OSG: ¿NUEVA ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL EN EL CAMPO?

Hasta los años ochenta, el modelo de organización de la población rural pasaba por el predominio sea de la forma organizativa tradicional que se denomina comuna o comunidad, o por nuevas formas más vinculadas a procesos productivos, como las cooperativas o las asociaciones. Zamosc nos da una visión de lo que sucedía en el medio rural a mediados de los años noventa: tanto la población indígena como la mestiza se organizaban predominantemente en comunidades, aunque había una dinámica importante de otras formas de organización, como las cooperativas y las asociaciones. Este mismo autor concluye señalando que “por primera vez, la comuna ha dejado de ser la opción preferencial de los ámbitos de predominio indígena” para resaltar la preferencia que tenía la población rural indígena y mestiza para organizarse bajo la modalidad de asociaciones, dado que “es más flexible e implica menores compromisos de los miembros” (Zamosc, 1995: 60). En realidad, los requisitos para formar una asociación no son muy exigentes en comparación con los de la comuna y, sobre todo, es una forma más adaptada a los modos productivos actuales de las familias campesinas con predominio del mercado (Martínez Valle, 1998). Pero, de hecho, ya existían federaciones, uniones de cabildos, uniones de organizaciones campesinas que aglutinaban a comunidades, asociaciones y cooperativas en las principales regiones del país. Es decir, ya existían las denominadas organizaciones de segundo grado, aunque todavía no habían sido visibilizadas

6 De allí que estas OSG estudiadas hayan tenido que refugiarse bajo el ala del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (PRODEPINE) para obtener financiamiento de proyectos relacionados con sus demandas prioritarias. Así, la OJAG obtuvo el financiamiento de 4 proyectos con un monto de u\$s 61.153; la UNORCAC 10 proyectos con un monto de u\$s 237.720; la UNOPAC, 18 proyectos con un monto de u\$s 103.807 y la TUCAYTA, 4 proyectos con un monto de u\$s 67.426.

por los científicos sociales del Norte como el elemento clave del desarrollo rural, sobre todo en el medio indígena.

Una primera aproximación a la situación de las OSG en el medio indígena, disponible gracias a varias investigaciones realizadas a mediados de la década del noventa, nos muestra los siguientes rasgos: inestabilidad a lo largo del tiempo, difusa representatividad con respecto a las bases, predominio de un perfil desarrollista en la configuración institucional así como en los objetivos (Martínez Valle, 1997). No obstante, la gran mayoría de estas organizaciones tenía debilidades en el perfil empresarial; es decir, todavía no respondían a la oferta que se estaba diseñando desde el Estado, las ONG y posteriormente el Banco Mundial para la elaboración y ejecución de proyectos. Hasta entonces se tenía otra imagen de estas organizaciones: más vinculadas con las demandas sociales y políticas del campesinado y, posteriormente, de los pueblos indígenas; pero ya desde la década del noventa experimentaban un giro importante en sus demandas centrales, tal como lo analizaremos más adelante. Para esta coyuntura de mitad de los noventa, las conclusiones eran más bien pobres, pues muy pocas OSG (17 de un total de 71 investigadas a nivel de la sierra) tenían capacidades tanto organizativas como de gestión para hacerse cargo del manejo de proyectos. Pero sólo tres entre ellas podían ser consideradas como OSG consolidadas desde esta perspectiva, es decir, tenían una real capacidad de demandar proyectos, ejecutarlos, y realizar las labores de seguimiento y evaluación. “Un pequeño grupo alcanzaba un perfil más moderno, deslindándose del resto que conservaba todavía el modelo tradicional de representación político-organizacional” (Martínez Valle, 1997: 120).

La imagen que podríamos elaborar sobre las OSG era que todavía no habían entrado de lleno en el andarivel desarrollista, pero que ya existía una oferta de proyectos que empezaba a ser tentadora, sobre todo para los indígenas, pero cuyo acceso pasaba por la *condición sine qua non* de la formación de organizaciones de segundo grado.

Hacia 1998, a solicitud del Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (PRODEPINE), se realizó un primer censo de las OSG que nos permite hacer un análisis más actualizado sobre este tipo de organización entre la población indígena y negra del país.

CUADRO 1
OSG A NIVEL DEL PAÍS

Regiones	Número	Porcentaje
Sierra Norte	31	20,0
Sierra Centro	73	47,1
Sierra Sur	37	23,9
Costa	14	9,0
Total	155	100,0

Fuente: PRODEPINE, *Censo de Organizaciones de Segundo Grado* (1998).

La distribución de las OSG no es homogénea entre las diversas regiones. Claramente se concentran en la sierra (91%) y, dentro de esta región, específicamente en la zona central, que agrupa a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. Esto muestra una estrecha correlación entre alta densidad de población indígena y densidad organizativa en las diversas regiones del país.

Así, por ejemplo, la provincia de Chimborazo es la que más OSG tenía, seguida en orden de importancia por Cañar, Cotopaxi, Imbabura y Tungurahua; en esas cinco provincias se ubica el 71,6% del total de estas organizaciones en la sierra ecuatoriana. Respecto a cualquier situación anterior, el nivel de organización formal se había incrementado, especialmente desde que se empezaron a ofertar proyectos desde el PRODEPINE. Esto nos lleva a plantear la hipótesis de que el incremento organizacional está vinculado con la oferta de proyectos no sólo desde las ONG o las instituciones tradicionales de desarrollo (iglesias, Estado u otros organismos regionales de desarrollo), sino fundamentalmente desde el principal proyecto indígena financiado con fondos del Banco Mundial. Una de las condiciones para obtener recursos de este proyecto era justamente que exista una contraparte organizacional, de preferencia una organización de segundo grado.

A pesar de que estos datos provienen de un censo, lamentablemente no se aplicó una pregunta clave: ¿desde cuándo existe esta organización? Esto nos habría podido servir para verificar nuestra hipótesis de que la mayoría de estas organizaciones surgieron cuando apareció la oferta de proyectos desde el PRODEPINE. De allí que el intento de medir la capacidad organizacional en base a una información que no discrimina el momento en que surgieron estas organizaciones nos parece un ejercicio poco fructífero. No obstante, algunas

conclusiones de estos datos son importantes para desmitificar la supuesta mayoría organizacional en el mundo indígena.

El objetivo de este censo era conocer la capacidad de las OSG para implementar proyectos en forma directa, sin el tutelaje tradicional de las ONG. De esta manera, para las instituciones que prestaban los recursos (Banco Mundial y FIDA) se establecía un canal directo de flujo de recursos financieros siempre y cuando exista una “capacidad institucional” adecuada. Los resultados y análisis que se han realizado de este censo (Ramón Valarezo, 2001: 49-51) muestran, no obstante, varios aspectos interesantes: la diversidad de organizaciones de primer grado agrupadas en las OSG, lo que desmitifica el supuesto de que todas ellas eran comunas indígenas (76% correspondían a clubs, juntas de agua, grupos religiosos, grupos de mujeres, asociaciones, cooperativas, mientras que sólo el 24% eran comunas); la mayoría de las OSG tenían un componente pluriétnico, mientras que aquellas más homogéneas son minoritarias (sólo el 35% eran exclusivamente indígenas). Estos dos aspectos ponen en tela de juicio la supuesta relación entre organización rural y etnicidad, en la medida en que es más bien la población rural de diverso origen étnico la que buscaba agruparse en las OSG como un mecanismo para obtener recursos económicos.

En cuanto a la capacidad institucional medida a través de varios indicadores (capacidad de gestión, cultura organizativa, capital humano, capital financiero), muestra que sólo el 26,6% de las OSG tenían posibilidades de manejar proyectos sin mayores dificultades, muchas de ellas no tenían ni siquiera los estatutos aprobados, otras tenía un bajo nivel de capital humano, y muy pocas manejaban fondos financieros significativos. A pesar de los esfuerzos por mostrar una situación aceptable, la realidad señalaba más bien fuertes debilidades en los aspectos empresarial-contables que interesaban al Banco Mundial para la ejecución del proyecto. Sin duda, este indicador también puede haber incidido en la asignación de proyectos del PRODEPINE a las OSG demandantes, tal como lo podemos ver en el siguiente cuadro.

CUADRO 2
DISTRIBUCIÓN DE LAS OSG ENTRE LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA

Provincias	Número de OSG (1998)	Porcentaje	Número de OSG (2002)	Porcentaje	Número de OSG ejecutoras (2003)	Porcentaje	Diferencia 1998-2003
Garchi	2	1,4	1	0,6	2	1,9	0
Imbabura	17	12,0	22	13,4	14	13,1	-3
Pichincha	12	8,5	15	9,1	7	6,5	-5
Cotopaxi	19	13,4	23	14,0	14	13,1	-5
Tungurahua	16	11,4	19	11,6	14	13,1	-2
Chimborazo	29	20,6	40	24,4	32	29,9	3
Bolívar	9	6,4	14	8,5	10	9,3	1
Cañar	20	14,2	18	11,0	9	8,4	-11
Azuay	11	7,8	7	4,3	3	2,8	-8
Loja	6	4,3	5	3,1	2	1,9	-4
Total	141	100,0	164	100,0	107	100,0	-34

Fuente: PRODEPINE, *Censo de Organizaciones de Segundo Grado* (1998) y Fundación Heifer-Ecuador (2002).

La oferta de proyectos PRODEPINE efectivamente significó un incremento de las OSG, que de 141 en 1998 pasan a 164 en 2002. No obstante, no todas las organizaciones de segundo grado lograron acceder al financiamiento de proyectos. Las OSG que en realidad ejecutaron proyectos hacia el año 2003 llegaron a 107, es decir, una disminución del 24% con respecto a aquellas registradas en 1998 y una disminución de 34,8% respecto al número total de OSG registradas en el censo de 2002. Solamente Chimborazo y Bolívar experimentaron un pequeño crecimiento, mientras que en el resto disminuyeron (en algunos casos en forma significativa, como ocurrió en Cañar).

Tenemos entonces un grupo de 107 OSG que ejecutan proyectos del PRODEPINE, y que siguen concentradas en la sierra central (ahora con el 52,3% del total), más específicamente en Chimborazo (30% del total), y dentro de esta provincia en el cantón Colta (donde se ubican el 38% de las OSG de la provincia). Tras esta primera constatación sobre la ubicuidad de las OSG, queda por analizar qué tipo de proyectos se implementan y si tienen relación con la pobreza de estas áreas.

CUADRO 3
OBJETIVOS DE LAS OSG

Objetivos principales	Porcentaje
Actividades/acciones del desarrollo	55,2
Fortalecimiento organizativo	13,8
Identidad	13,8
Educación y capacitación	10,3
Representación política reivindicativa	6,9
Total	100,0

Fuente: Fundación Heifer-Ecuador (2002).

De acuerdo con estos datos, las OSG se orientaban hacia la implementación de actividades de desarrollo, mientras los otros objetivos más vinculados con los temas organizativos, identitarios y políticos quedaban en segundo plano⁷. Véase, por ejemplo, el bajo nivel del objetivo de representación política, así como el de educación y capacitación. De allí que muchas de estas OSG, al parecer, se transformaban paulatinamente en un nuevo tipo de ONG rurales, posicionadas de mejor forma para captar la oferta de recursos hacia el mundo rural.

Las opiniones sobre los resultados del censo de OSG realizado en 2002 muestran que, ciertamente, si bien se incrementó el número de organizaciones, también se produjo un cambio importante en la orientación y objetivos de las mismas. Así, por ejemplo, el informe elaborado por la Fundación Heifer-Ecuador señala lo siguiente: “Estos resultados nos hablan no sólo de la orientación primordial de las OSG hacia la consecución de objetivos de desarrollo y la gestión de proyectos, sino también de una tendencia hacia un menor involucramiento en la consecución de objetivos de carácter político reivindicativo, que estuvo presente en el origen de muchas OSG en las décadas de 1970 y 1980. Este hecho parece ser aparentemente contradictorio con el posicionamiento alcanzado por el movimiento indígena en el escenario político nacional. Una posibilidad de interpretación puede encontrarse en la existencia de una especie de delegación por parte de las OSG hacia las organizaciones nacionales y provincia-

7 En este sentido es interesante el paralelismo con el caso peruano, donde también los grupos pobres participan más en organizaciones “dedicadas al área de desarrollo y de servicios sociales” (Díaz-Albertini Figueras, 2003: 272).

les, para que estas asuman directamente las tareas de representación política reivindicativa del movimiento indígena, mientras las OSG se concentran más directamente en las acciones de desarrollo a nivel micro regional y se vinculan a la acción política desde su articulación a las organizaciones nacionales” (Larrea, 2002: 15-16). También se podría perfectamente plantear la hipótesis de que la dinámica organizacional del medio rural estaba desconectada de la dirigencia del movimiento indígena, en otras palabras, que existían dos andariveles por los cuales marchaban las organizaciones de segundo grado y las nacionales: uno, desarrollista, a través de la implementación de proyectos por parte de las primeras, y otro, más político, impulsado por las segundas (especialmente por la CONAIE) y centrado en reivindicaciones de corte étnico.

Incluso a un autor como Thomas Carroll, con mucha empatía con las OSG, no dejaba de sorprenderle que el mencionado censo de 2002 arrojara tres resultados notables: el bajo número de organizaciones de base, la diversidad étnica y la reciente formación en el tiempo (Carroll, 2003: 442). Estas mismas conclusiones ya fueron encontradas en el censo de 1998, pero el hecho de que se repitieran en 2002 mostraba que eran tendencias inherentes a las OSG de la sierra. El primer hecho muestra que el 36,5% tenía pocas organizaciones de base (diez o menos), si a esto le sumamos que un importante número de ellas se habían formado en los últimos cinco años o menos (el 37%), y que estas organizaciones tenían un marcado carácter multiétnico (60,6%), se puede llegar a la conclusión que no todo lo que brillaba era capital social y que uno de los factores fuertes explicativos de este *boom organizacional* era sin duda la oferta de proyectos del PRODEPINE que creaba organizaciones *ad hoc*, resucitaba otras, y también consolidaba un reducido sector conocido en los informes como el de las organizaciones con “capacidades organizativas” medio-altas que corresponde al 12,9% del total (Carroll, 2003: 444).

Un factor que permite confirmar estas tendencias es la orientación de los proyectos impulsados desde las OSG. Para obtener financiamiento las OSG debían demostrar no sólo *capacidad organizativa* (medida por la disponibilidad de un mínimo equipo técnico, equipamiento básico, legalización de estatutos, local, etc.) sino también la elaboración de un diagnóstico participativo o Plan de Desarrollo Local (PDL) en el que se sintetizaban los principales problemas de la organización. La mayoría de estos diagnósticos elaborados bajo la

metodología FODA (Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas) no reflejaban sino de muy lejos la problemática local o regional y se limitaban a repetir la tradicional lista de demandas insatisfechas de comunidades pobres (agua potable, aulas, centros de salud, caminos, casas comunales, etc.). No obstante, hay que reconocer que en algunas OSG se hicieron notables esfuerzos por plantear proyectos de corte productivo (queseras comunitarias, invernaderos, granjas integrales), aunque sin considerar su viabilidad real. Otras, en cambio, buscaron fortalecer proyectos en marcha, sobre todo en el área de riego, y otras, finalmente, demandaron proyectos de tipo medioambiental.

CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LOS PROYECTOS PRODEPINE
POR TIPO DE PROYECTO

Provincias	IS	IPC	A	C	Total	Porcentaje
Azuay	4	4			8	2,3
Bolívar	11	11	1		23	6,6
Cañar	14	10	4	2	30	8,7
Carchi	3	4			7	2,0
Chimborazo	36	61	15		112	32,4
Cotopaxi	14	19	7		40	11,6
Imbabura	15	20	7	1	43	12,4
Loja		7	1	1	9	2,6

Fuente: PRODEPINE (2003).

IS: Infraestructura social; IPC: Infraestructura productiva comunitaria;
A: Ambientales; C: Capacitación.

La mayoría de los proyectos se ubican en el rubro Infraestructura productiva comunitaria, lo que confirma la importancia asignada a este tipo de proyectos por parte de las OSG. Una demanda más moderna en la búsqueda de acciones que tengan un impacto en los ingresos de las familias rurales. Le siguen en importancia los proyectos de infraestructura social, luego los ambientales y, en último lugar, los de capacitación. El perfil de los proyectos PRODEPINE es claramente desarrollista y no tiene mucho que ver con la consolidación de los valores culturales y étnicos tal como aparece en el discurso oficial y en la misma visión de los beneficiarios. Según el mencionado informe Heifer: “Esto

nos permite concluir que si bien la motivación más directa para el trabajo de las organizaciones la constituye la búsqueda de atención a las necesidades más inmediatas de sus asociados y la negociación de recursos de asistencia al desarrollo, en la práctica de las OSG, los resultados de las acciones de desarrollo no siempre son suficientemente significativos. Evidentemente, en este aspecto confluyen factores de diversa índole, que van desde condicionantes socio-económicos estructurales, pasando por la baja disponibilidad de recursos financieros para programas de desarrollo local de mayor envergadura, hasta las enormes debilidades en la institucionalidad existente en el propio campo del desarrollo” (Larrea, 2002: 16). Efectivamente, si consideramos que la oferta de proyectos llegó a la suma de u\$s 7.312.871, y obtenemos un promedio de acuerdo al número total de proyectos financiados, llegamos a la modesta suma de u\$s 21.136 por cada uno, una cantidad que no permite desarrollar proyectos de envergadura que signifique una real modificación de la pobreza rural.

La conclusión a la que podemos llegar en forma provisional es que las OSG efectivamente se consolidaron durante las dos últimas décadas más como unidades ejecutoras de pequeños proyectos que como instancias de carácter político-organizativo de la población rural. Se ha levantado una nueva arquitectura organizacional como respuesta a una intervención externa para impulsar acciones de desarrollo, mientras que las reivindicaciones político-organizativas quedaban en segundo plano o simplemente desaparecían. La visión de las mismas entidades ejecutoras confirma esta aseveración, pues el 39,3% planteaba que los logros habrían sido las acciones para el desarrollo, y el 32,1% consideraban el fortalecimiento organizativo. En cambio, únicamente el 10,7% consideraba que lo político-organizativo había sido uno de los logros, el 14,3% la educación y capacitación y sólo el 3,6% la identidad étnica (Larrea, 2002).

¿LAS OSG SON PORTADORAS DE CAPITAL SOCIAL?

La noción de capital social ha despertado muchas expectativas tanto a nivel teórico como entre los *policy makers* de la ruralidad. En América Latina se han ensayado experiencias de trabajo en el campo de la promoción campesina (Durston, 2001), realizado investigaciones para medir el capital social (Carroll, 2003) y especulado mucho sobre su “potencialidad institucional” para impulsar nuevas generaciones de proyectos de desarrollo rural o solucionar el problema de la pobreza

(Uphoff, 2003). La influencia de la noción de capital social proveniente de la vertiente teórica del *rational choice* (Coleman, 2000) ha sido notable en la región, sobre todo luego de la publicación del estudio de Putnam (1993) sobre el caso italiano. Así, en torno a una definición funcionalista de capital social en tanto conjunto de normas, redes, reciprocidad y confianza, se ha formado una visión optimista y al mismo tiempo utópica sobre las formas en las que se organiza la población rural. Si en el Norte de Italia el capital social estaba dado por la densidad organizativa (sin importar mucho el tipo de organización, desde un coro hasta un equipo de fútbol), en los Andes ¿por qué no íbamos a disponer de un sólido capital social en la medida en que no sólo subsisten las comunidades andinas, sino que la población busca organizarse bajo cualquier modalidad dentro de las expectativas generadas por las políticas de desarrollo rural? Como lo señala un autor, “los pobres tienden a participar más en asociaciones y, en ese sentido, a tener más capital social que otros sectores socio-económicos” (Díaz-Albertini Figueras, 2003: 271). De todas formas, esta visión optimista fue criticada por varios autores que advertían sobre el riesgo de la idealización de las organizaciones indígena-campesinas (Durston, 2001; Dirven, 2003).

Una segunda vertiente teórica que todavía no ha tenido una aplicación práctica es la de Bourdieu (2001a). Para este autor, el capital social es ante todo una “suma de recursos actuales y potenciales correspondientes a un individuo o un grupo, en virtud de que estos poseen una red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o menos institucionalizados, esto es la suma de los capitales y poderes que semejante red permite movilizar. Hay que admitir que el capital puede revertir una diversidad de formas, si se quiere explicar la estructura y dinámica de las sociedades diferenciadas” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 82). Definición bastante compleja pero que hace alusión a una doble dimensión relacional: el individuo y su grupo inmersos en “redes duraderas”, y el capital social relacionado con otros capitales (económico, cultural, simbólico). Se trata entonces de un proceso donde existen recursos no económicos que pueden ser utilizados individual o socialmente para alcanzar otros en un determinado contexto social (campo social en la terminología de Bourdieu).

Esta concepción de capital social se aleja diametralmente de la de Coleman (2000) que parte del supuesto de la elección racional en base al cálculo de ventajas y desventajas de la cooperación y que puede o no desembocar en la acción colectiva. El concepto elaborado

por Bourdieu tiene también la ventaja de mirar al capital social dentro de un proceso en el que un grupo puede consolidarlo o perderlo. Pero este proceso se da en un *campo social* determinado en el que actúan grupos sociales, individuos, comunidades y donde se tejen las redes de solidaridad y de reciprocidad, y se institucionalizan determinados comportamientos solidarios. A nivel rural estas prácticas se dan en las familias, en las comunidades y probablemente en las organizaciones de segundo grado. Pero también pueden no darse, no sólo porque no existe *energía social* (Hirschman, 1988), sino porque el predominio de las prácticas mercantiles ha erosionado todo ese tejido solidario que correspondía a otro momento de la historia comunitaria. De allí la importancia de comprender la compleja arquitectura de formación del capital social, por lo menos en los niveles familiar, comunal y supracomunal (Martínez Valle, 2003). Las comunidades campesinas, señala Durston (2001: 10), tienen muchos “precursores” del capital social (memoria social, identidad, religión, vecindad, amistad, parentesco, reciprocidad, satisfactores socio-emocionales) pero de allí no se desprende mecánicamente que todas tengan capital social. En estudios de campo hemos comprobado que existe un proceso de erosión de las prácticas de solidaridad y reciprocidad, debido a que las estrategias de las familias campesinas para enfrentar un mundo mercantil globalizado se tornan más individuales (la migración, los cultivos de invernadero, las nuevas ocupaciones no agrícolas, etc.) y también porque la agricultura pasa progresivamente a ser una ocupación marginal. En cierto sentido, la base productiva sobre la cual se tejían esas relaciones empieza a resquebrajarse y las nuevas actividades no requieren de ese tejido, sino de un fortalecimiento del *rational choice*. No es que la gente no quiera practicar esas relaciones, lo que sucede es que no puede.

El caso ecuatoriano, dado el avance organizacional registrado durante las décadas del ochenta y noventa, constituía un terreno muy fértil y abonado para empezar a aplicar un poco mecánicamente el concepto de capital social a las organizaciones de segundo grado que se habían formado en esos años. Esto presentaba grandes ventajas, sobre todo a quienes consideraban que el *proyectismo/desarrollismo* había en gran parte fracasado, debido a la poca eficiencia de los intermediarios (en gran medida ONG e instituciones privadas de desarrollo) y que ya era hora de invertir directamente a través de las mismas organizaciones campesinas. Por otro lado, las políticas de ajuste y la consecuente desestructuración del Estado dejaban el campo abierto para llenar este vacío

institucional, y qué mejor que a través de estas organizaciones, supuestamente surgidas al calor de una dinámica de base, que faciliten una mejor inversión de los recursos, disminuyan “los costos de transacción” de las operaciones financieras en el medio rural y tengan un impacto positivo en la disminución de la pobreza rural.

Esta era la visión del rol de las OSG por parte del Banco Mundial, principal gestor del proyecto PRODEPINE que, a juicio de esta institución, luego de la primera fase de ejecución, ha sido todo un éxito, no justamente en la disminución de la pobreza rural sino en la consolidación de una práctica proyectista/desarrollista en el medio indígena campesino, un proceso que catapulta a las OSG hacia una práctica mucho más ajustada a los intereses *inmovilistas* del post Consenso de Washington que de los productores pobres del medio rural. En esta línea, uno de los éxitos del PRODEPINE, según la visión de un técnico del BM hasta mediados de 2002, ha sido “la preparación de 211 planes de desarrollo local, 1.774 propuestas de subproyectos, 700 estudios de preinversión, y ha financiado 648 subproyectos, con una inversión total superior a los u\$s 10 millones. Además, como una actividad especial dirigida a las mujeres, se ha financiado 547 cajas solidarias, beneficiando a 14.022 socias” (Uquillas, 2002: 13). Toda una muestra de cómo se crea capital social en el campo.

La aplicación de la noción de capital social a las organizaciones campesinas e indígenas es realmente nueva. Un estudio realizado en 1995 para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) sobre la participación campesina en los proyectos de desarrollo rural, demostraba cómo la participación de las OSG en las empresas rurales había sido un fracaso. Uno de los hallazgos pertinentes al tema que estamos analizando es la debilidad interna de estas organizaciones. Debilidad que se reflejaba en “el distanciamiento entre dirigencia y miembros y entre OSG y organizaciones de base” (Arrobo y Prieto, 1995: 131). En casi todos los estudios de caso realizados se constató esta falencia que afectaba no sólo a la misma marcha económica de las empresas campesinas sino a la sostenibilidad de las OSG⁸. Lo sorprendente es que esta constatación haya sido olvidada

⁸ Ver, por ejemplo, los voluminosos estudios sobre el capital social del Banco Mundial en <<http://worldbank.org/socialcapital>> y del consorcio CEPAL/Universidad del Estado de Michigan (Atria et al., 2003); apenas se mencionan los estudios de Bourdieu (Bourdieu y Wacquant, 1995; Bourdieu, 2001a; 2001b).

por los panegiristas del capital social en la década del noventa. Así, según Carroll, por ejemplo, “la OSG misma es un sistema de relaciones colectivas y complejas superpuestas y, en este sentido, genera su propio capital social. Para que el sistema funcione tienen que armonizarse o superarse muchos intereses de facciones y redes verticales clientelares. En las OSG horizontales más tradicionales esto se logra recalcando la identidad étnica y realizando actividades de tipo ritual que refuerzan la cohesión cultural, mientras que en sistemas más modernos el funcionamiento depende de la atención que se dé a intereses comunes económicos y de servicios (por ejemplo, el acceso a capital, mercados y tecnología)” (Carroll, 2003: 23). Esta definición induce a pensar que todas las OSG son el resultado de complejas articulaciones horizontales y verticales orientadas hacia la conformación de un capital social. Pero para lograr esto hay que salvar dificultades como el faccionalismo y el clientelismo. Lo interesante de este análisis es que la organización *genera su propio capital social*, en la medida en que es un sistema de relaciones colectivas y complejas superpuestas. Aquí se está aceptando como un dato ya dado la presencia de relaciones colectivas por el solo hecho de pertenecer a una OSG.

Una descripción más simple, pero más adecuada a la realidad, es la esbozada en la primera parte de este trabajo: una agrupación de comunidades u otras formas de organizaciones de base que buscan, a través de otro nivel de agregación, solucionar sus problemas urgentes ejerciendo presión ante las autoridades locales, regionales o nacionales. Esta descripción no supone en principio la presencia de capital social, a no ser que se entienda como tal el simple hecho de agruparse para solucionar fines comunes. Al contrario, nuestra hipótesis es que a partir de este grado de organización se podría construir capital social tanto en el nivel de la OSG como a nivel de base. Creemos que no se puede establecer la ecuación $\text{forma organizativa} = \text{capital social}$. El capital social es mucho más que una manifestación concreta de organización de la población, que puede surgir por muchas motivaciones y en coyunturas específicas y no siempre como el resultado de prácticas de solidaridad que inducen a la formación de complejos sistemas de confianza y reciprocidad.

HACIA UNA NUEVA AGENDA PARA LAS OSG

Uno de los problemas que ha incidido en un progresivo alejamiento de las propuestas para el sector rural y que aún hoy persiste es que se

parte de una lectura anticuada de la sociedad rural. No sólo el Estado, sino también las ONG e instituciones de desarrollo consideran que el mundo rural es predominantemente agropecuario. Por supuesto, las organizaciones campesinas y las OSG también comulgan con esta visión, de tal forma que las propuestas de proyectos empatan muy bien entre la demanda proveniente (supuestamente) de las bases y la oferta de las instituciones financieras. A pesar de la existencia de estudios que desde mediados de la década del noventa ya planteaban los cambios que ha experimentado la sociedad rural (importancia de las actividades no-agrícolas, del ingreso extra-agrario, de la migración, del proceso exacerbado de minifundización, de la concentración de tierras, etc.) estos no han sido tomados en cuenta o fueron considerados como perturbadores de una visión idílica de la sociedad rural (Martínez Valle, 2000). El mismo avance del capitalismo agrario ha generado islotes de modernidad donde surgen más nítidamente las relaciones sociales de tipo clasista. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en las áreas floricultoras o de agricultura de exportación, donde se ha formado un nuevo proletariado de origen indígena vinculado a formas precarias y flexibles de trabajo (Korovkin, 2003). No obstante, de nada les sirve a estos trabajadores pertenecer a la comuna, y por efecto de ósmosis, a una OSG, para luchar por sus demandas salariales y mejores condiciones de vida.

Una muestra de esta visión es el contenido de los famosos Planes de Desarrollo Local (PDL) que realizan las OSG para obtener proyectos. En el país existen tantos PDL como entidades ejecutoras reconocidas por el PRODEPINE. La mayoría de ellos no son el resultado de una reflexión sistemática sobre lo que realmente sucede en el campo, sino más bien diagnósticos instrumentalizados por la oferta de proyectos. Si hay dinero para proyectos hay que justificarlos de algún modo, y para eso sirven estos planes⁹.

El desafío más importante para las OSG rurales es impulsar un proceso de consolidación del capital social. Hasta ahora, los esfuerzos externos han estado centrados en dotarlas de una capacidad ejecutora de proyectos, pero esto no es suficiente para dar sostenibilidad a la organi-

⁹ La mayoría de las OSG investigadas en 1992 se concentraban en los rangos medio-bajo y bajo en cuanto a los procesos de planificación, puesto que si bien casi todas disponían de PDL, no había homogeneidad ni en el cumplimiento de los mismos, ni en la participación ni uso de ellos para la toma de decisiones; sólo una minoría (14,8%) disponía de un plan estratégico (Larrea, 2002: 32).

zación. En efecto, como ha sucedido con frecuencia en el medio rural, una vez que se terminan los fondos de un proyecto, las organizaciones se sumergieron en una profunda crisis cuando no en un proceso terminal de extinción¹⁰. La sostenibilidad no puede provenir únicamente de un capital social institucional, es decir, centrado en la dirigencia, sino sobre todo del capital social acumulado en las bases, que responde a prácticas solidarias, de reciprocidad y confianza entre las familias y entre las comunidades. Pero justamente este capital social se encuentra en crisis y requiere apoyo que podría provenir de la OSG. En la medida en que existen proyectos de tipo comunal, es posible que estas prácticas se reactiven, y se vean las ventajas en la práctica de este tipo de tejido solidario. Esto requiere disponer de un conocimiento real de los procesos que se generan en las bases y no confiar en la supuesta vigencia de una estructura organizativa de base que ha cambiado mucho. Me refiero concretamente a los *cabildos*, una institución rural tradicional bastante desgastada, sin representatividad democrática y donde predominan los caciquismos de toda índole. Únicamente de esta manera se podría llegar a superar la dicotomía que encierra el discurso sobre el capital social desde la OSG: una visión idealizada del comunitarismo andino versus una práctica cada vez más individual de las familias y comunidades.

No hay que desconocer que el ámbito de acción de las OSG actualmente enfrenta un nuevo desafío que surge por el lado de los gobiernos locales. Actualmente en el medio rural, y gracias a las modificaciones introducidas en la Constitución de 1998, se eligen alcaldes y Juntas Parroquiales en forma democrática. En algunos cantones del país (alrededor de 25) existen alcaldes indígenas y Juntas Parroquiales que vienen en cierta medida a copar el espacio político y de desarrollo, antes en manos de las OSG. El discurso del desarrollo local también ha invadido los poros de la sociedad rural y, hay que reconocerlo, existen experiencias exitosas, al menos en aspectos relativos a la participación de la población¹¹. Sin embargo, estas iniciativas no han estado acompañadas de procesos de transformación productiva, llegando en la mayoría de estos municipios a la situación paradójica de ser “ámbitos donde la población está muy organizada pero continúa sien-

10 De hecho, algunas empresas desaparecieron y varias OSG entraron en crisis, sobre todo en la región de la costa, como sucedió por ejemplo en la zona de Vinces y Baba con la Unión de Organizaciones Campesinas de Vinces y Baba (UNOCAV).

11 Este es el caso del Municipio de Cotacachi que ha logrado impulsar Planes de Desarrollo Local con la participación activa de la población urbana y rural.

do pobre”. Estos municipios se ubican en “territorios que se caracterizan por una institucionalidad robusta, que con frecuencia se expresa en una identidad cultural fuerte, pero que carecen de opciones económicas endógenas capaces de sustentar procesos sostenidos de superación de la pobreza rural” (Schejtman y Berdegué, 2003: 38). Las experiencias de cooperación entre OSG y municipios no han sido muy halagadoras, más bien se ha creado un terreno fértil para el surgimiento de conflictos¹². Se trata entonces de una tarea de coordinación con los gobiernos locales y de un nuevo rol que podrían tener las OSG en el ámbito de desarrollo local. En la medida en que las OSG ejecuten proyectos de beneficio local, necesariamente deberían coordinar con los gobiernos locales para priorizar acciones y actuar como puentes (*bridging*) hacia otras instituciones (financieras o no) externas. El *expertise* acumulado en el manejo de proyectos y el personal técnico deberían estar al servicio de Juntas Parroquiales y Municipios rurales. De esta forma, en lugar de conflicto podría generarse la cooperación y fortalecimiento mutuos. En esta perspectiva, seguramente es hora de pensar en otro tipo de asociaciones y en la creación de redes de tipo territorial que superen la estrecha visión de lo estrictamente local y tengan posibilidades reales de implementar proyectos que solucionen la pobreza rural.

Por último, si el flujo de recursos disminuye en el futuro, muchas OSG tenderán también a disminuir, en cambio es bastante probable que la orientación de las que sobrevivan adopte nuevamente el perfil político-reinvidicativo, una vez que las políticas económicas de *goteo* en el medio rural se hayan agotado y desgastado por completo. Es probable también que surjan nuevas organizaciones más afines a los intereses de nuevos actores (asalariados rurales, pobres sin tierra, etc.) formados en el medio rural y que, hoy por hoy, no tienen representación política real alguna.

La institucionalidad rural en el caso ecuatoriano ha avanzado bastante. Existen organizaciones supracomunales, nuevos líderes, proyectos, aspectos que parecen escasear en otros países de la subregión, como por ejemplo, Perú (Urrutia Ceruti, 2000). No obstante, para hablar de una sociedad democrática rural, estos elementos no son suficientes, pues como lo hemos explicado en este trabajo, esta *acumulación social* ha sido lamentablemente instrumentalizada desde

12 En Cotacachi, por ejemplo, la UNORCAC no tiene una relación óptima con el alcalde indígena, en la medida en que la actividad del Municipio no se concentra en el medio rural.

fuera y necesita encontrar su cauce en dos instancias de la sociedad rural: a nivel de las bases, a través de la creación y/o reactivación de capital social; y a nivel de los gobiernos locales, creando sinergias y, sobre todo, generando espacios de concertación en búsqueda de soluciones reales para la pobreza rural.

CONCLUSIONES

Esta aproximación al mundo organizacional rural muestra que la efervescencia organizativa ecuatoriana ha caminado en estrecha relación con la oferta de proyectos que vienen mayoritariamente de afuera. Hay una correlación entre crecimiento de OSG y crecimiento de la oferta de proyectos. En este sentido, el boom organizacional no tiene mucha sostenibilidad y corre el serio riesgo de ser instrumentalizado por los intereses de las agencias externas y, en especial, del Banco Mundial dentro de la política del post Consenso de Washington (Fine, 2003; Harris, 2001).

Este trabajo muestra también que hay que ser muy cautos en el establecimiento de la igualdad entre organización campesina y capital social. La visión utópica de que detrás de cada organización existe capital social parte de una concepción utilitarista de este concepto antes que de una de corte relacional. Lo que se observa es más bien una situación de crisis de relaciones solidarias en las bases del mundo rural y nada permite sacar conclusiones mecánicas sobre la existencia de capital social en todas las OSG.

El desafío para las OSG se encuentra precisamente en construir o consolidar el capital social en las bases y en estrechar los vínculos con ellas para salir del cerco desarrollista en el que se encuentran. Frente a la multiplicidad de OSG en pequeños territorios, con bases endebles motivadas por el clientelismo de los proyectos, son preferible pocas organizaciones participando en torno a un sólido capital social de corte regional.

Dada la nueva arquitectura institucional del mundo rural, se requiere no sólo una nueva lectura de los procesos sociales sino también una nueva forma de actuar en estrecha relación con los gobiernos locales (Chiriboga, 1996). De esta forma, las OSG podrían alcanzar mayor sostenibilidad y aportar la experiencia alcanzada en beneficio del desarrollo rural local o regional.

Finalmente, si bien las OSG han tenido un rol protagónico en el mundo rural, están más vinculadas con la problemática del mundo

indígena y, en menor medida, campesino. Pero han surgido nuevos actores sociales que no se ven representados en este tipo de organizaciones y que seguramente impulsarán nuevas o viejas formas de organización más acordes con la nueva dinámica social del campo antes que con las demandas étnicas o culturales que, tal como se plantea en este trabajo, han sido fácilmente captadas por políticas de reajuste de la sociedad capitalista.

BIBLIOGRAFÍA

- Arrobo, Carlos y Prieto, Mercedes 1995 *La participación campesina en proyectos de desarrollo rural* (Quito: IICA) abril.
- Atria, Raúl; Siles, Marcelo; Arraigada, Irma; Robinson, Lindon J. y Whiteford, Scott (comps.) 2003 *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma* (Santiago: CEPAL/Michigan State University) enero.
- Bahamondes Parrao, Miguel 2001 *Contradicciones del concepto Capital Social. La antropología de las alianzas y subjetividad campesina* (Washington) Ponencia presentada en el XXIII Congreso de LASA, 6-9 de septiembre.
- Bebbington, Anthony; Ramón Valarezo, Galo; Carrasco, Hernán; Torres, Víctor H; Peralvo, Lourdes y Trujillo, Jorge 1992 *Actores de una década ganada. Tribus, comunidades y campesinos en la modernidad* (Quito: COMUNIDEC).
- Bebbington, Anthony 2003 "Capital social e intensificación de las estrategias de vida: organizaciones locales e islas de sostenibilidad en los Andes rurales" en Atria, Raúl; Siles, Marcelo; Arraigada, Irma; Robinson, Lindon J. y Whiteford, Scott (comps.) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma* (Santiago: CEPAL/Michigan State University) enero.
- Bourdieu, Pierre 2001a "El capital social. Apuntes provisionales" en *Zona Abierta* (Madrid) N° 94/95.
- Bourdieu, Pierre 2001b *Poder, derecho y clases sociales* (Bilbao: Desclée de Brouwer).
- Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc 1995 *Respuestas. Por una antropología reflexiva* (México: Grijalbo).
- Brass, Tom 2000 *Peasants, Populism and Postmodernism. The return of the agrarian myth* (London: Frank Cass).
- Brass, Tom (ed.) 2003 *Latin American Peasants* (London: Frank Cass).
- Bretón Solo de Zaldívar, Víctor 2001 *Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los andes ecuatorianos* (Quito: FLACSO/Universidad de Lleida).

- Carroll, Thomas F. (ed.) 2003 *Construyendo capacidades colectivas. Fortalecimiento organizativo de las federaciones campesinas-indígenas en la sierra ecuatoriana* (Quito: RISPERGRAF).
- Chiriboga V., Manuel 1996 “Las Organizaciones no Gubernamentales, las Organizaciones Campesinas y el Desarrollo Rural Sostenible en los países andinos” en MAG/FAO/CIP/IICA/UNEP/CONDESAN *Memorias del seminario regional para la promoción de sistemas de producción agrícola sostenible para el sector campesino en los andes centrales* (Quito) 15-18 de enero.
- Coleman, James 2000 “Social capital in the creation of human capital” in Dasgupta, Partha and Serageldin, Ismail (eds.) *Social Capital. A multifaceted perspective* (Washington: World Bank).
- Coronel, Rosario 1998 *Diagnóstico y censo de las organizaciones de segundo y tercer grado indígenas y negras del Ecuador* (Quito: PRODEPINE).
- Díaz-Albertini Figueras, Javier 2003 “Capital social, organizaciones de base y el Estado: recuperando los eslabones perdidos de la sociabilidad” en Atria, Raúl; Siles, Marcelo; Arraigada, Irma; Robinson, Lindon J. y Whiteford, Scott (comps.) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma* (Santiago: CEPAL/Michigan State University) enero.
- Dirven, Martine 2003 “Entre el ideario y la realidad: capital social y desarrollo agrícola. Algunos puntos para la reflexión” en Atria, Raúl; Siles, Marcelo; Arraigada, Irma; Robinson, Lindon J. y Whiteford, Scott (comps.) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma* (Santiago: CEPAL/Michigan State University) enero.
- Durston, John 2001 *Evaluando Capital Social en comunidades campesinas en Chile* (Washington) Ponencia presentada en el XXIII Congreso de LASA, 6-9 de septiembre.
- Entrena Durán, Francisco 1998 *Cambios en la construcción social de lo rural. De la autarquía a la globalización* (Madrid: Tecnos).
- Fine, Ben 2000 *Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the turn of the Millenium* (London/New York: Routledge).
- Fine, Ben 2003 “The social capital of the World Bank” in Fine, Ben; Lapavitsas, Costas & Pincus, Jonathan (eds.) *Development policy in the twenty-first century. Beyond the post-Washington Consensus* (London: Routledge).
- Gómez, Sergio 2000 “Organizaciones rurales en América Latina (marco para su análisis)” en *Revista Austral de Ciencias Sociales* (Valdivia) N° 4, enero-agosto.
- Harriss, John 2001 *Depoliticizing Development. The World Bank and Social Capital* (India: Left World).

- Hirschman, Albert O. 1988 “The principle of conservation and mutation of social energy” in Annis, Sheldon & Hakim, Peter (eds.) *Direct to the poor. Grassroots Development in Latin America* (Boulder/London: Lynne Rienner Publishers).
- Korovkin, Tanya 2003 “Desarticulación social y tensiones latentes en las áreas florícolas de la Sierra ecuatoriana” en *Ecuador Debate* (Quito) N° 58, abril.
- Larrea, Fernando (coord.) 2002 *Las capacidades de las organizaciones indígenas y afroecuatorianas de segundo y tercer grado: resultados del censo de entidades ejecutoras de PRODEPINE e índice de fortalecimiento institucional* (Quito: Fundación Heifer) abril.
- Martínez Valle, Luciano 1997 “Organizaciones de segundo grado, capital social y desarrollo sostenible” en *ICONOS* (Quito) N° 2, mayo-julio.
- Martínez Valle, Luciano 1998 “Comunidades y tierra en el Ecuador” en Degregori, C. Iván (ed.) *Comunidades: tierra, instituciones, identidades* (Lima: Diakonia/CEPES/Arariwa).
- Martínez Valle, Luciano 2000 *Economías Rurales: actividades no-agrícolas* (Quito: CAAP).
- Martínez Valle, Luciano 2003 “Capital social y desarrollo rural” en *ICONOS* (Quito) N° 16, mayo.
- Ostrom, Elinor 2000 *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva* (México DF: UNAM/CRIM/Fondo de Cultura Económica).
- Paramio, Ludolfo 2000 “Decisión racional y acción colectiva” en *Leviatán* (Madrid) N° 79.
- Putnam, Robert 1993 *Making democracy work: civic traditions in modern Italy* (Princeton: Princeton University Press).
- Ramón Valarezo, Galo 2001 “El índice de capacidad institucional de las OSGs en Ecuador” en Bebbington, Anthony y Torres, Víctor Hugo (eds.) *Capital Social en los Andes* (Quito: COMUNIDEC/Abya Yala).
- Rivarola, Domingo M. y Galeano, Luis A. 1998 “Los pobres rurales como actores sociales” en *Revista Paraguaya de Sociología* (Asunción) Año 35, N° 102, mayo-agosto.
- Schejtman, Alexander y Berdegué, Julio A. 2003 “Desarrollo Territorial Rural” (Santiago) febrero, mimeo.
- Uphoff, Norman 1995 “Adaptar los proyectos a la gente” en Cernea, Michael M. *Primero la gente. Variables sociológicas en el desarrollo rural* (México DF: Fondo de Cultura Económica).
- Uphoff, Norman 2003 “El capital social y su capacidad de reducción de la pobreza” en Atria, Raúl; Siles, Marcelo; Arraigada, Irma; Robinson, Lindon J. y Whiteford, Scott (comps.) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma* (Santiago: CEPAL/Michigan State University) enero.

- Uquillas, Jorge 2002 *Fortalecimiento de la capacidad de autogestión de los pueblos indígenas y Afro-ecuatorianos: el caso de PRODEPINE* (Quito) Ponencia presentada en el Primer Encuentro de Ecuatorianistas de LASA, 18-20 de julio.
- Urrutia Ceruti, Jaime 2000 *Institucionalidad rural e identidad étnica* (Lima: CEPES). En <<http://www.desarrollolocal.org>>.
- Whitaker, Morris 1996 *Evaluación de las reformas a las políticas agrícolas en Ecuador. Estudio síntesis* (Quito: IDEA) Vol. 1.
- Zamosc, León 1995 *Estadística de las áreas de predominio étnico en la sierra ecuatoriana* (Quito: Abya-Yala).